

# México tras las elecciones de 2006: crisis de legitimidad y agotamiento del neoliberalismo

**Alejandro Álvarez Béjar**

Las elecciones generales mexicanas de julio de 2006 arrojaron unos resultados oficiales que algunos consideraron que eran «muy típicos de las democracias avanzadas». Sin embargo, los resultados iban en contra de la experiencia política mexicana y provocaron una importante crisis de legitimidad. Con una participación superior a los 40 millones de votantes en esta ocasión, se proclamó como vencedor de la presidencia a Felipe Calderón, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), de derechas, que en el recuento oficial derrotó al candidato de centro-izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, por una diferencia del 0,58%. Calderón logró el 35,89% de los votos, mientras que Obrador obtuvo el 35,31%.

El resultado era tan sorprendente como imposible de creer. Solo tres meses antes, las encuestas situaban a López Obrador muy por delante, a la vez que Calderón recibía acusaciones de haber otorgado concesiones poco claras a Hildebrando Corporation (de la que eran socios destacados su cuñado y su propia esposa) cuando era ministro de Energía. Hildebrando Corporation tenía, además, un contrato del Instituto Federal Electoral

---

• Artículo publicado en *MR*, vol. 59, n° 3, julio-agosto de 2007, pp. 12-25. Traducción de Joan Quesada. Alejandro Álvarez Béjar es socioeconomista y profesor permanente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro del Comité '68 Pro Libertades Democráticas.

(IFE) para el diseño del sistema electrónico de cómputo de votos para las elecciones de 2006, y se la acusaba de haber cruzado información con el Secretariado de Desarrollo Social (SEDESOL), que gestiona todos los programas gubernamentales contra la pobreza. Eso no prueba que hubiera robo electoral, pero poco falta para ello cuando cargos del Gobierno y empresas privadas estrechamente vinculadas a estos tienen acceso a información privilegiada en el momento de las elecciones.

López Obrador rechazó inmediatamente los resultados oficiales por fraudulentos y exigió un recuento «voto por voto y cabina por cabina», hasta que se disiparan todas las dudas o el proceso electoral se declarara nulo e inválido. Hay que destacar que más de un millón y medio de personas respondieron al llamamiento de López Obrador a marchar por el centro de Ciudad de México en la primera manifestación de protesta pos-electoral.

En esas mismas elecciones estaban también en juego la totalidad de los escaños del Congreso Nacional de México, que incluye la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Senadores. Sin embargo, en este caso la distancia entre los partidos no solamente fue igual de estrecha, sino que, misteriosamente, se contabilizaron más votos para la elección de los legisladores que para la elección del presidente. El resultado final es que, entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —en el poder durante 71 años, pero ahora la tercera fuerza en ambas cámaras—, tienen hoy una cómoda mayoría suficiente de centro-derecha. Estos últimos resultados no han sido impugnados, y los legisladores pusieron el sello a sus escaños tan rápidamente como les fue posible, en un intento de otorgar legitimidad a sus puestos.

Esa mayoría suficiente del PAN-PRI tendrá una importancia estratégica en el intento de poner en práctica la segunda generación de reformas estructurales neoliberales exigida por los Estados Unidos y las organizaciones financieras internacionales: la privatización de la seguridad social (especialmente de las pensiones), la reforma fiscal, la apertura del sector energético al capital privado, la desregulación del mercado laboral y la creciente mercantilización de la educación y la sanidad, reformas diseñadas para profundizar en el desmantelamiento del Estado del bienestar.

En manos del PAN, la presidencia mexicana podrá seguir igualmente la agenda de seguridad instigada por la Administración Bush para toda Norteamérica después del 11 de septiembre de 2001, pero lanzada públicamente en Waco, Texas, en junio de 2005, con el nombre de Asociación para la Seguridad y Prosperidad de Norteamérica (SPPNA en sus siglas inglesas). Se trata de un mecanismo no sometido al escrutinio legislativo y diseñado para

intensificar las acciones relacionadas con el NAFTA mediante acuerdos entre los presidentes de los Estados Unidos, Canadá y México, todos los cuales se distinguen actualmente [2007] por su conservadurismo político.<sup>1</sup>

### **Una crisis política dual: de legitimidad y de credibilidad**

El proceso electoral en su conjunto provocó una grave crisis política. Esta tiene dos aspectos: una crisis de legitimidad del nuevo presidente, y una grave crisis de credibilidad de las instituciones electorales del país. Desde una perspectiva histórica más amplia, dicho problema político es la expresión de una transición no resuelta que tiene que ver con el desmantelamiento del anterior Estado del bienestar y la subsiguiente crisis del Estado depredador neoliberal.

Sin embargo, no debemos exagerar el alcance de la crisis política, ni tampoco subestimar las consecuencias del triunfo de la derecha. Hoy en día, la derecha cuenta con el respaldo financiero de los principales grupos monopolistas nacionales y extranjeros. Controla también la presidencia, la mayoría del Congreso, el poder judicial, las emisoras de televisión, a los mandos militares y a sectores del ejército, así como a la jerarquía de la Iglesia Católica Romana y a sectores de esta. Como consecuencia, es probable que México experimente tensiones políticas y sociales nuevas y más agudas, y no solo en el contexto de las elecciones.

La gravedad de la crisis política de las elecciones de 2006 se debió no solo al estrecho margen de diferencia entre los candidatos de la derecha y del centro-izquierda, sino también a la abundancia de pruebas, en todas las fases del proceso, de que se había montado una operación de manipulación por parte del Estado: una compleja estrategia antidemocrática que abarca toda una combinación de acciones económicas y políticas. Entre ellas, el desvío de recursos públicos para la compra de votos, ataques orquestados en los medios de comunicación, la alteración de las cifras de votos en muchas localidades con escasa supervisión e, incluso, la manipulación electrónica de los resultados electorales. Hubo además prohibiciones absurdas, como la de hacer campaña durante las vacaciones de Navidad o en ciudades de los Estados Unidos, prescindiendo de que muchos de los mexicanos expatriados seguían teniendo derecho a voto.

La maniobra liderada por el empresario y presidente saliente Vicente Fox Quesada fue elemental y descaradamente escandalosa. Fox desvió recursos públicos hacia el PAN para que este los utilizara para transferir información confidencial que poseía el IFE a la Hildebrando Corporation

(contratada precisamente por el propio IFE para diseñar el cálculo operacional y el sistema de cómputo del voto electrónico que debían utilizarse en 2006) y al SEDESOL, que gestiona todos los programas especiales de lucha contra la pobreza.<sup>2</sup> Por esa y otras muchas razones, Fox se ha ganado con creces el apelativo de «traidor a la democracia».

La coordinación de las declaraciones públicas oficiales en la televisión del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y del presidente Fox tuvo una importancia clave en esa compleja operación de fraude. Casi simultáneamente, ambos anunciaron en la televisión nacional que Felipe Calderón era el «ganador de la presidencia» por poco más de 250.000 votos, un cometido que, por ley, no les correspondía.

La maniobra contó con la inmediata connivencia del candidato del PRI a la presidencia, Roberto Madrazo. Al admitir públicamente el fracaso de su candidatura, su voz se sumaba a las de quienes reconocían a Calderón como ganador. Es una prueba más de que hubo un esfuerzo concertado del PAN y el PRI para imponer de facto al nuevo presidente.

De hecho, los operadores políticos del PRI participaron en todo el proceso. Eso es especialmente cierto en el caso de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SNTE), Elba Esther Gordillo, que viajó a San Diego mucho antes de las elecciones para desarrollar una sofisticada estrategia en la que se recurría a miembros del sindicato para controlar a los administradores de las cabinas de votación. También participaron los operadores del PAN, en particular el veterano anticomunista Manuel Espino, que admitió que había visitado a los gobernadores del PRI para «coordinar» actuaciones.

Ambos partidos contaron con la supervisión de expertos estadounidenses y españoles. Existe constancia de que el Instituto Internacional Republicano proporcionó asesoramiento a militantes jóvenes del PAN con dinero del Fondo Nacional para la Democracia. Y expertos del Partido Popular (PP) español diseñaron estrategias en los medios de comunicación de masas para fomentar el miedo entre las clases medias. El ex presidente español, José María Aznar, llegó incluso a viajar a México para desacreditar públicamente a López Obrador.

No obstante, fue la fuerza disciplinada y centralizada del ejército, al mando de Vicente Fox, la que resultó decisiva para llevar a Calderón a la oficina presidencial y allanar el camino hacia una peligrosa militarización de la vida en México.

Amplios sectores de la población, incluidos votantes del PAN y el PRI, quedaron con serias dudas respecto a la limpieza de la «victoria» de Felipe Calderón, ya que este ni aceptó un recuento de votos ni ofreció ningún

argumento serio para rechazarlo. Tampoco se sumó a la espontánea celebración de la victoria de sus votantes. Guardó silencio a la espera de que su «victoria» fuera confirmada por las instituciones electorales y, mientras tanto, empezó a desempeñar sus funciones como el verdadero y firme ganador. Estaba claro que la crisis de legitimidad no solo lo afectaba a él, sino a todo el sistema electoral del país. Así pues, ¿por qué negarse a aceptar un recuento?

A pesar de que fueron centenares de miles las personas que salieron a la calle a protestar contra el fraude, debemos reconocer que lo hicieron en condiciones políticas relativamente débiles, después de haber sido desbancados mediante maniobras en un proceso político indudablemente corrupto contra el cual no se habían tomado suficientes precauciones. El excesivo optimismo y la falta de previsión de los equipos de López Obrador y el PRD para documentar las irregularidades electorales dejaron la puerta abierta a la transferencia final del poder de Vicente Fox a Felipe Calderón bajo una máscara de «constitucionalidad», con una mayoría del PAN-PRI respaldada por las Fuerzas Armadas (si bien es cierto que dicha transferencia se hizo por la puerta trasera del edificio del Congreso).

Mientras, pocos días antes, una Convención Democrática Nacional reunida en el Zócalo de Ciudad de México y en las calles adyacentes y con la asistencia de más de un millón de personas había declarado a Andrés Manuel Obrador «legítimo presidente».

Debido a la campaña de miedo y mentiras de los medios de comunicación monopolistas, en México reinó un clima de alarma y confrontación, de exasperación generalizada, de polarización social y tensión cívica, antes, durante y después de las elecciones; un clima que tuvo distintas formas de expresión en las calles. La culminación de dicho clima fue la frustración colectiva debida a la falta de confianza en los resultados, así como a la falta de claridad y de flexibilidad de las organizaciones electorales. En consecuencia, la crisis de legitimidad y la falta de credibilidad de las instituciones electorales han quedado políticamente sin resolver.

Un examen de los cien primeros días de la Administración de Calderón revela el espectacular despliegue del ejército en maniobras contra los traficantes de droga en varios estados de México. El objetivo era claramente el de obtener «legitimidad mediante el uso de la fuerza» dando respuesta a un tema socialmente angustioso, en lo que no es sino la continuación del uso del miedo como medio para llegar a la mente de las personas y ganar votos. Además, los militares cobran un nuevo papel como árbitros y ejecutores de una estrategia de control territorial, de juegos de guerra para entrenar a las fuerzas armadas en operaciones de intervención rápida por todo

el país. Todo ello ha ido acompañado de amenazas de los militares de utilizar la fuerza para recuperar el control, no solo de los territorios en manos de comunidades indígenas autónomas rebeldes, como los zapatistas de Chiapas, sino de todos los territorios indígenas de México, actualmente en estado de agitación, igual que sucede en el resto de Latinoamérica.

La reiterada presencia del alto mando militar en cualquier acontecimiento público de cierta importancia al que acuda Calderón pretende legitimar su participación en ámbitos que anteriormente no le incumbían. La militarización de la vida mexicana es un proceso que, por una parte, presagia la determinación de imponer las políticas neoliberales por la fuerza si es necesario. Por otra parte, pretende criminalizar la resistencia social a fin de justificar el uso de la violencia extrema. A medida que el poder del Estado gobernado por el PAN-PRI va cobrando ímpetu, la idea de suprimir con el uso de la fuerza a las fuerzas sociales disidentes va ganando terreno.

Aún más pronunciada es la sobrecogedora utilización de la «mayoría suficiente» de que disponen las fuerzas combinadas del PAN y el PRI. Dicha mayoría está imponiendo la aprobación de complejas reformas legales (decidas únicamente por pequeños grupos empresariales de ideas afines), justo al inicio de un periodo de vacaciones para disolver las constantes protestas en las calles. Un ejemplo de ello es la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para privatizar las pensiones de los empleados del sector público.

Por esa misma razón, en el plano estrictamente político, es posible que no tarde en aparecer una corriente de opinión popular que exija el ejercicio del derecho a revocar el mandato de Calderón. Eso no solo prestaría continuidad a la defensa de la voluntad popular frustrada por el fraude cometido, sino que supondría también una forma de neutralizar la falaz mayoría que el PAN y el PRI forman actualmente en el Congreso.

### **Cuatro tendencias peligrosas: descrédito del sistema electoral, Estado religioso, criminalización de los movimientos sociales y autoritarismo**

Mucho analistas tienen la sensación de que la crisis de credibilidad de las instituciones electorales ha desencadenado una crisis de gobernabilidad que, a medio plazo, resultará aún más grave. Los neoliberales se comportan como si fueran una fuerza única con mayoría absoluta en México, convencidos aparentemente de que nada hay menos urgente que la necesidad de reforma radical de las instituciones electorales.

Sin embargo, lo cierto es que han surgido serias dudas sobre la calidad de las bases de datos de votantes, sobre la autenticidad de los resultados, sobre la equidad en el acceso a recursos financieros y a espacios de publicidad electoral en la radio y la televisión, sobre la transparencia de la Administración y sobre el recuento y la clasificación de las papeletas, por no hablar del rendimiento de cuentas y de la elusión de responsabilidades en referencia a las alegaciones sobre las irregularidades de los funcionarios electorales.

Existe también una crisis del sistema de partidos, pero esta se esconde tras el hecho de que todos los partidos reciben cantidades excesivas de fondos públicos. Además de no ser fiables, las elecciones son astronómicamente caras. Los partidos funcionan como franquicias que son adquiridas por las élites económicas y burocráticas corruptas que controlan a sus clientelas electorales con métodos corporativos, y cada vez están más lejos de servir a los intereses civiles.<sup>3</sup>

Además, entre los resultados postelectorales se cuenta también la polarización del debate nacional sobre temas de salud pública tales como la despenalización del aborto en el Distrito Federal. La derecha está explotando el tema, no solo como una cuestión moral determinante, sino como una oportunidad para exacerbar un debate ideológico en el que la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, aliada de Calderón, alcance una importante visibilidad pública, en un intento de revertir la larga historia de separación entre Estado e Iglesia, con el objetivo, justamente, de influir en la definición de las políticas públicas en materia de educación, cultura y salud. Sin embargo, dicha intervención no es vista con buen ojos ni siquiera por los creyentes. Según una encuesta reciente, un 80% de los católicos rechazan la idea de que la Iglesia intente influir en las políticas públicas.

Nos enfrentamos claramente a una agenda de la derecha diseñada para fomentar las acciones transnacionales y movilizar a sus masas en toda Latinoamérica. Hasta el papa Benedicto XVI declaró públicamente su oposición a la ley mexicana específica que pretende despenalizar el aborto en Ciudad de México, cosa que resulta poco habitual.<sup>4</sup>

Una extrema tensión social rodea a cuestiones como la privatización de las pensiones. El PAN y el PRI aprobaron como un relámpago, el 22 de marzo de 2007, una nueva ley de seguridad social para los trabajadores del Estado que afecta a las pensiones de millones de trabajadores de los sectores educativo y sanitario, pilares del Estado del bienestar. Por supuesto, su «mayoría suficiente» contó también con la bendición de las burocracias sindicales controladas por el PRI, que temporalmente se beneficiarán de la gestión de los fondos de pensiones, antes de entregarlos al poder financiero de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).

Mientras tanto, los trabajadores llanos que han protestado contra dicha acción suman ya decenas de miles, y son muchos más los que se están preparando para salir a la calle en oposición a esa artera y peligrosa ley. Al igual que con las pensiones, los sindicalistas más combativos y los seguidores más fieles de López Obrador se movilizaron de forma «preventiva» en una compleja guerra de movimientos para evitar que los planes de privatización de las compañías energéticas mexicanas llegaran de repente al Congreso. Recientemente, cientos de miles de trabajadores del sector energético y de otros sectores salieron a la calle para reafirmar su rechazo a las privatizaciones.

Existe también una inquietud generalizada por la subida de los precios de los productos básicos, sobre todo después de que Calderón autorizara en enero de 2007 una subida de más del 66% en el precio de las tortillas de maíz, fuente fundamental de nutrición y calorías para el sector más pobre de la población mexicana. La cuestión dista mucho de estar resuelta, ya que el «pacto» promovido por el Gobierno para limitar el precio de las tortillas solo dura hasta agosto de 2007, y beneficia a las principales cadenas de tiendas.

La preocupación por el desempleo es general en México. En febrero de 2007, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informaba de que a finales de 2006 México tenía casi 43 millones de trabajadores formales e informales. De esa cifra, 1,6 millones estaban oficialmente sin empleo (una de las cifras más bajas de Latinoamérica, lo que se explica por los «peculiares» métodos de cómputo); 3 millones se encontraban subempleados; 12 millones eran trabajadores informales; y otros 5 millones habían dejado oficialmente de buscar trabajo, convencidos de que ya no tenían ninguna oportunidad de encontrarlo.<sup>5</sup> La mitad de la fuerza de trabajo está desempleada, subempleada o empleada en actividades informales.

El espantoso comportamiento del empleo no se debe solo a las políticas neoliberales y al impacto del NAFTA, sino que refleja además tres tendencias, a cual de ellas más preocupante. Se trata de la migración, la descomposición social tal y como se pone de relieve en la inseguridad pública (asaltos, robos, secuestros, etc.) y la persistencia de las protestas sociales en las calles.

La emigración mexicana supera todos los récords mundiales: nadie ha exportado más fuerza de trabajo que México con el envío de trabajadores a los Estados Unidos. Solo durante la Administración Fox (2000-2006), se cree que cruzó la frontera una media de 450.000 personas al año. Eso supone que casi 2,5 millones de trabajadores abandonaron el país y a sus familias en busca de rentas más altas o, simplemente, en busca de trabajo.



Como consecuencia, los envíos de los emigrantes a los familiares en el país son cada año mayores, lo que sitúa a México en lo alto de la tabla mundial de envíos con 16.600 millones de dólares en 2005.<sup>6</sup> (Y se estima que la cifra habrá superado los 26.000 millones para el año 2007).

A pesar de ese paisaje de devastación social y, sorprendentemente, en medio del miedo y la rabia masivos exacerbados por el neoliberalismo, durante el proceso electoral y la crisis política subsiguiente se ha evidenciado en todo México un movimiento pacífico de resistencia civil. En ocasiones, este ha dado lugar a la desobediencia civil (pacífica) en algunas zonas y conflictos específicos. En dos ocasiones, el Estado ha respondido con una violencia policial y paramilitar extrema so pretexto de que se había incurrido en «conductas delictivas».

La primera de esas ocasiones fue en el caso de los sucesos de San Salvador Atenco, justo cuando la Otra Campaña organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llegaba en convoy a Ciudad de México procedente de Chiapas, los días 3 y 4 de mayo de 2006. Los vecinos fueron víctimas de una actuación del Gobierno contra los comerciantes de flores locales calculada para provocar una protesta popular capaz de garantizar una «instructiva» reacción de represión violenta. Las cadenas de televisión privadas se encargaron de retransmitir la represión a toda la nación como símbolo del trato que se dispensaría a las fuerzas «radicales» a partir de ese momento. En este caso, se trataba del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT).

El FDPT formaba parte de la dinámica pacífica de la Otra Campaña. Se había creado y movilizado con éxito gracias a la firme resistencia popular contra la Administración Fox cuando esta lanzó un plan de construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México en tierras de San Salvador Atenco.

Esta vez, en venganza por la derrota política infligida, esa misma Administración utilizó la represión contra el FDPT de San Salvador Atenco en mayo de 2006: dos personas murieron, 207 fueron encarceladas, miles fueron perseguidas y más de dos docenas de mujeres fueron violadas por los agentes de la Policía Federal Preventiva. Veintinueve personas permanecen todavía en prisión. Los participantes en el movimiento de protesta y todas las personas detenidas, incluso las que no habían participado, han sido permanentemente criminalizadas como «radicales», «violentos» e «intransigentes».

La represión gubernamental se usó nuevamente cuando ni el Gobierno federal ni el gobierno del estado de Oaxaca se vieron capaces de detener las masivas manifestaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para exigir la dimisión del gobernador del PRI, Ulises Ruiz.

Entre octubre y noviembre de 2006, en el clima de conflicto posterior a las elecciones mexicanas, la Policía Federal Preventiva cargó contra los manifestantes de la APPO. En el núcleo del movimiento de masas estaba la democrática Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, a la que el gobernador acusaba de «politizar» las reivindicaciones sindicales por el hecho de exigir, además de subidas salariales, mejoras en las escuelas y ayudas económicas para la alimentación y calzado de los alumnos (muchos de ellos asistían a clase descalzos y con el estómago vacío).

Todo ello dio paso a un triste capítulo de graves violaciones de los derechos humanos. Más de 23 personas han muerto desde el inicio del conflicto. Ciento cuarenta y una han sido encarceladas en una prisión del estado de Nayarit, a más de 1.200 km. de la ciudad de Oaxaca. Docenas de mujeres han sido violadas y se han realizado centenares de detenciones. Entre los detenidos hay ancianos, mujeres y niños que no han participado en el movimiento, pero que han sido capturados por la policía para infundir miedo a la población en general. Es el mismo patrón de represión y criminalización de los activistas sociales que se utilizó en San Salvador Atenco.

Sin embargo, cabe resaltar en este caso la originalidad, complejidad e importancia de la lucha de la APPO. La APPO es una organización popular surgida de las comunidades indígenas mexicanas más intensamente transnacionalizadas. Constituye un nuevo paso sin precedentes en la lucha de las clases subalternas por la autorrepresentación y el autogobierno. No solo ha hecho que entre en crisis la cultura empresarial mexicana, sino que también ha practicado la experimentación social con formas creativas de resistencia al neoliberalismo depredador, intensificado en la región con la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá (PPP).

El PPP es un programa de desarrollo regional para los nueve estados del sur-sudeste de México y América Central. Pretende crear una serie de autopistas y vías de ferrocarril para conformar un sistema multimodal de transporte interoceánico, con redes de telecomunicaciones, así como la modernización y la creación de puertos y aeropuertos, justo en la zona de México que contiene la mayoría de los recursos petroleros, petroquímicos e hidráulicos, y de la biodiversidad. La región cuenta con la mayoría de la población indígena (seis de un total de casi diez millones), la cifra más elevada de pobres y los niveles más altos de marginalidad. Para que el PPP sea un éxito, es necesario dismantelar no solo el precario Estado del bienestar, sino también las formas de organización de la comunidad indígena y su cultura (sobre todo el tipo de cultura que considera los recursos naturales como propios), ya que todos los proyectos como ese requieren cambios drásticos en los usos de la tierra.

Eso explica por qué tanto el Gobierno federal como los gobiernos estatales, durante las administraciones de Fox y de Calderón, han utilizado directamente la represión violenta contra los líderes y militantes de la APPO (al igual que contra los simpatizantes y miembros de la Otra Campaña, liderada por los zapatistas de Chiapas). Todo ello ha sido debidamente documentado por organizaciones locales, nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

Las comunidades indígenas internacionalizadas de Oaxaca son en la actualidad víctimas de un ataque en dos frentes: la criminalización de su movimiento social en México, y la criminalización de los inmigrantes por parte de la Administración Bush en los Estados Unidos.

En ambos casos se aducen cuestiones de seguridad nacional, pero se trata tan solo de un medio de intentar someter a la desorganización y al aislamiento social y político al sector más pobre de los trabajadores. Dichos trabajadores se han convertido en un elemento esencial, y seguirán siéndolo, del mercado laboral transnacional entre México y los Estados Unidos. Es ese un hecho fundamentado en la complementariedad demográfica y el impacto económico dual de la destrucción de los medios de subsistencia en la agricultura mexicana y centroamericana, y la creación de empleos en la agroindustria estadounidense (servicios de baja productividad y actividades industriales que los trabajadores estadounidenses consideran sucias, peligrosas o desagradables). No hay duda de que los oaxaqueños y la APPO están abriendo la vía hacia renovadas acciones transnacionales de los trabajadores inmigrantes mexicanos, en alianza con los trabajadores norte y centroamericanos, asiáticos y europeos de los Estados Unidos.

## **El agotamiento del modelo de acumulación neoliberal en México**

Ha llegado el momento de examinar, aunque sea brevemente, el trasfondo económico estructural de la crisis política mexicana. Eso nos ayudará a esclarecer el agotamiento del modelo de acumulación neoliberal en México. Este se manifiesta en cinco efectos fundamentales: estancamiento económico, derroche del superávit, desigualdad en la distribución de rentas, parasitismo financiero y creciente monopolización. Todos esos rasgos contrastan con la proyección nacional e internacional del modelo como un triunfo de la economía de mercado.

Si atendemos al crecimiento económico durante la Administración Fox, entre los años 2000 y 2006 el crecimiento medio anual del PIB fue de solo

el 2,3% y, durante tres años, el periodo 2001-2003, el crecimiento fue negativo o inferior al aumento de la población. Según un informe de los últimos 25 años, los años transcurridos desde la instauración del modelo neoliberal, el crecimiento medio anual ha sido del 1,93%, mientras que la población ha crecido justo por debajo del 2% (el 1,76%). A lo largo de esos 25 años, el PIB per cápita experimentó un crecimiento medio anual del 0,17%. Eso significa que le harían falta a México más de 400 años para doblarlo. Millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar a causa del paro y de los bajos salarios, lo que supone la prueba más clara del fracaso del neoliberalismo.

José Valenzuela ha calculado que en México el aumento de la ratio de producto excedente sobre el producto agregado (es decir, el potencial de la economía para la reproducción ampliada) ha sido consecuencia del descenso de los salarios reales. Solo un 15-16% del total del excedente se destina a la inversión; los usos improductivos representan el restante 84-85%. Si lo que importa para maximizar el crecimiento económico es la relación entre excedente, inversión y renta nacional, resulta altamente significativo que el 85% del producto excedente se utilice de forma improductiva, y que solo el 15-16% del excedente se destine a la formación de capital. Y si atendemos a la inversión en producción, el índice es inferior al 10%. En pocas palabras, el modelo neoliberal ha dado lugar a una fuerte explotación de los trabajadores urbanos y rurales y al despilfarro del excedente a gran escala.

México es y ha sido históricamente un país de enormes desigualdades sociales. Ni siquiera los neoliberales niegan que con las políticas de los últimos 25 años dichas desigualdades se han vuelto más pronunciadas. Varios indicadores vienen a demostrarlo. Según datos de la Bolsa mexicana, al cierre de 2006 solo 173.000 inversores (0,16% de la población total de México) habían acumulado en bolsa capital equivalente al 37,7% del PIB. Según el Banco Mundial, el 50% de los 105 millones de habitantes de México viven en la pobreza, con salarios inferiores a 4 dólares diarios. De ellos, el 15% viven en la pobreza extrema, con rentas inferiores a 1 dólar diario.

José Valenzuela, nuevamente, a partir de datos de la CEPAL del año 2004, resalta el hecho de que, en términos de distribución de rentas entre las familias mexicanas, en 2002 el 10% más pobre de las familias representaba el 3,1% de la renta familiar nacional, mientras que el 10% más rico tenía el 31,2%. La desigualdad es flagrante.

Utilizando las estadísticas más desagregadas disponibles en el país, y después de revisar más de una treintena de variables relativas al bienestar socioeconómico, Gabriel Mendoza Pichardo ha identificado tres efectos

regionales significativos relativos a los niveles de renta y de bienestar en México: (1) polarización entre el norte (relativamente más rico) y el sur (más pobre, atrasado y con niveles inferiores de bienestar); (2) el hecho de que la subregión más pobre es el sur-sudeste de México (justamente la zona que cubre el PPP); y (3) la realidad de que, con el neoliberalismo, se ha detenido la tendencia histórica del periodo 1950-1980 hacia la convergencia regional en PIB y PIB per cápita de los 31 estados mexicanos.<sup>7</sup>

Como ya sabemos, el neoliberalismo en el plano global llegó de la mano de la prevalencia hegemónica de los intereses del capital financiero, que desplazó a la burguesía industrial en el seno del bloque dominante. Intereses, ingresos rentistas y ganancias especulativas no solo han interferido en la importancia de los beneficios industriales, sino que han condicionado el funcionamiento del sistema en su totalidad, en la medida en que la «financiarización» de la economía global se ha convertido en una característica predominante.<sup>8</sup>

Con el advenimiento del neoliberalismo, México ha experimentado un paradójico cambio estructural y ha pasado de un modelo de industrialización de sustitución de importaciones a un modelo de industrialización orientado a la exportación. Eso ha tenido diversas consecuencias negativas o peligrosas. Las importaciones están superando a las exportaciones. El comercio exterior de México está muy concentrado en los Estados Unidos (algo más del 90%) y en un reducido número de grupos de productos (solo diez). Muchos de los encadenamientos (o efectos de arrastre y propulsión) entre industrias se han visto truncados, lo que ha provocado la desaparición de miles de empresas e, incluso, de ramas enteras. La importancia relativa del sector industrial en la economía está decayendo, como sucede con la importancia de la rama estratégica de la metalurgia dentro del sector industrial. Y la composición del producto total se ha visto distorsionada cuando el sector financiero ha aumentado su importancia en términos del PIB.

La economía mexicana también está aquejada de un grave problema general de parasitismo financiero, patente en las finanzas públicas por el lado de los gastos, pero también en los niveles de endeudamiento de las grandes empresas públicas y en los costes de dicho endeudamiento, así como en los consumidores más modestos. Ello se debe al escaso porcentaje de préstamos que corresponde al sector productivo y en los altos costes de las comisiones bancarias por servicio.

Aunque durante las elecciones México no estaba sumido en una crisis financiera como las de 1982, 1987 y 1994, ya que los pagos de la deuda eran relativamente asequibles,<sup>9</sup> no debemos olvidar que la deuda exterior del país alcanza los 40.300 millones de dólares y que, en los últimos vein-

te años, hemos gastado centenares de miles de millones de dólares en pagos por deuda. Desde principios de 1990, hemos visto decaer la deuda externa a expensas del incremento de la «deuda interior». La deuda interna del Gobierno federal es en la actualidad de 110.000 millones de dólares.

El parasitismo financiero es un problema grave. Las finanzas públicas soportan dos cargas financieras muy pesadas: (1) rescatar a los bancos y autopistas entregados en régimen de concesión a empresarios privados en la época de la crisis del peso mexicano; (2) la carga añadida de los títulos de acciones en bolsa de las corporaciones públicas, estados y ayuntamientos de todo el país, que representan un 38% del gasto total. Al mismo tiempo, el coste de financiar a los inversores privados encargados de la construcción de infraestructuras para las empresas energéticas mexicanas fue en 2006 de casi 19.000 millones de dólares.

Por último, el neoliberalismo ha sido en México la ideología empresarial que más muertes de empresas ha provocado debido a la creciente monopolización de todos los ámbitos de la economía. Un pequeño núcleo de no más de una veintena de grandes grupos financieros mexicanos, más otra veintena de grupos extranjeros, han logrado estar presentes en todo el país. Así, México no solo cuenta con algunas de las personas más ricas del planeta, sino que el poder de los grupos financieros se extiende tanto a las actividades productivas (industria y agricultura) como al comercio, los servicios y las finanzas. Su peso es decisivo en actividades tales como las telecomunicaciones, la electrónica y la producción de automóviles, cemento, vidrio, cerveza y textiles.

Las exportaciones de petróleo, las actividades de las fábricas maquiladoras y las remesas de dinero de los trabajadores emigrantes siguen siendo las principales fuentes de ganancias de México en el exterior, y eso plantea al menos dos dudas significativas sobre la continuidad de su existencia. En primer lugar, las reservas de petróleo se están agotando rápidamente y, aparte de representar una parte considerable de las ganancias mexicanas en el exterior, las exportaciones de petróleo generan más de un tercio de la recaudación impositiva del Estado. En segundo lugar, en el futuro las remesas de dinero de los emigrantes dependerán en gran medida del tipo de política migratoria que practiquen los Estados Unidos.

En pocas palabras, el modelo neoliberal de acumulación está dando en México señales de desfallecimiento y el Estado depredador neoliberal está sumido en una crisis política. Sin embargo, eso no significa la muerte de las políticas neoliberales. Por el contrario, debido a la pérdida de legitimidad, lo que significa es que habrá una tendencia a recurrir a políticas de tipo populista que beneficien especialmente a las clientelas de la derecha.

Eso se combinará con una extensa campaña de represión dirigida contra la izquierda para evitar que el descontento se generalice en México cuando el proyecto de saqueo de los trabajadores y de los recursos naturales se intensifique.

Aun así, dado que la naturaleza explotadora y la agenda represiva de las reformas neoliberales son cada día más claras, las protestas tenderán a extenderse casi al mismo ritmo que la descomposición social causada por el modelo.

A todos esos problemas de la economía mexicana, hay que añadir las implicaciones de los desequilibrios exterior y fiscal de la economía estadounidense, que presagian una ralentización del crecimiento, un posible repunte de la inflación y una política de austeridad por lo que respecta al gasto social. Todo eso va acompañado de la intensificación del gasto militar en la guerra de Irak. Así pues, está en duda la estabilidad de la economía política estadounidense, lo que puede tener funestas consecuencias para México.

A pesar de todo, no hay lugar para el pesimismo. Detrás de las derrotas contingentes en la lucha electoral y social, existen fuertes señales de que se está creando una nueva cultura democrática en todo México, nuevas alternativas de abajo a arriba de organización popular y solidaridad internacional. Hay claros síntomas de que la resistencia está viva y goza de buena salud y de que, lenta pero firmemente, está madurando.

## Notas

1. Analizo este proceso en más detalle en Alejandro Álvarez Béjar, «Economía política de la integración profunda de México con América del Norte», en Alejandro Álvarez Béjar y Gabriel Mendoza Pichardo (eds.), *Integración económica: impactos regionales, sectoriales y locales en el México del siglo XXI*, Editorial ITACA-UNAM-UNISON-UV, México, 2007, pp. 36-42.
2. Véase la escandalosa explicación de la malversación llevada a cabo por el PAN de fondos públicos destinados a vivienda rural, proyectos rurales de producción, apoyo a la tercera edad y empleo temporal documentada por el periodista José Reveles en *Las manos sucias del PAN*, Editorial Planeta, México, 2006.
3. No hay que olvidar que son varios los países latinoamericanos que han asistido al hundimiento de su sistema de partidos. Sobre el caso de Venezuela, véase Jana Morgan, «Partisanship during the Collapse of Venezuela's Party System», *Latin America Research Review* 42, n° 1, 2007, pp. 78-98.
4. Véase Juan Balboa, «Rechaza el papa Benedicto XVI despenalización del aborto en el DF», *La Jornada*, 21 de abril de 2007.
5. Véase INEGI, *Población Económicamente Activa*, en <http://www.inegi.gob.mx/>.
6. Véase Raúl Delgado Wise, «Migration and Imperialism: The Mexican Workforce in the Context of NAFTA», *Latin American Perspectives* 33, n° 2, marzo de 2006, pp. 35-39.

7. Véase Gabriel Mendoza Pichardo, «Evolución económica y social de las regiones de México 1990-2005», en Béjar y Mendoza Pichardo, *Integración económica*, sobre todo las tablas 1, 2 y 3.
8. Examinó dicha hegemonía en el caso de México en *La crisis global del capitalismo en México 1968-1995*, Editorial ERA, México, 1987, cap. 3. Una notable explicación de la complejidad, tendencias y problemas asociados a la financiarización del capitalismo es la que ofrece John Bellamy Foster en «La financiarización del capitalismo», capítulo 2 del n°8 de *Monthly Review*. Selecciones en castellano, titulado *25 años de neoliberalismo*, Hacer, Barcelona, 2008, pp. 41-54.
9. Eso explica en parte la sensación predominante de «calma financiera» en las elecciones de 2006. He desarrollado el argumento en «Mexico 2006 Elections: The Rise of Populism and the End of Neoliberalism?», *Latin American Perspectives*, n° 147, marzo de 2006, pp. 17-19.